

Comunidad
de MadridCONSEJERÍA DE FAMILIA,
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALESEste documento se ha obtenido directamente del
original que contenía todas las firmas auténticas y
se han ocultado los datos personales protegidos y
los códigos que permitirían acceder al original**ORDEN****NÚMERO 2745/2025**

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Unidad Administrativa
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN

Exp.: AM002-21-66-C2753-10-00-23M

PRIMERO.- Mediante Orden 470/2022, de 8 de marzo, de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social se adjudicaron a la entidad SENIOR 2000 S.L.U. (B82572413) 134 plazas del "Acuerdo Marco del Servicio Público de Atención Residencial a Personas Mayores Dependientes, Modalidad Financiación Total y Parcial. Año 2021", en el Centro C1737, Orpea Pinto (actualmente denominado Bouco Pinto I), C/ San Martín, 20 - 28320 Pinto - Madrid.

A fecha 26 de marzo de 2025 la Consejería De Familia, Juventud y Asuntos Sociales tiene suscrito contrato basado de dicho Acuerdo Marco, con un plazo de ejecución de 730 días por un total de 100 plazas en el citado centro residencial.

SEGUNDO.- Con fecha 26 de marzo de 2025, en el ejercicio de las funciones de seguimiento y control de la ejecución del contrato, se realiza al centro una visita por un técnico de la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia.

Como consecuencia de la citada visita, se emite informe técnico en el que se señala que la presencia física del personal de atención directa supone una ratio del 0,42.

La ratio se ha calculado sobre el número de profesionales que han prestado servicios, según la documentación de fichajes aportada por el centro y una ocupación media de 156 usuarios, durante el periodo del 10 al 16 de marzo de 2025.

TERCERO.- A la vista de lo anterior, mediante escrito de fecha 6 de mayo de 2023, la Dirección General de Atención al Mayor y la Dependencia, comunicó a la entidad, a los efectos del trámite de audiencia y alegaciones, la siguiente propuesta de imposición de penalidades:

"La tipificación de los hechos como incumplimiento de la obligación contractual descrita en el apartado 21 B.2.1 de la Cláusula 1ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el contrato y la imposición de una penalidad del 1 % de la BP, esto es, 26.280 euros, como resultado de los siguientes cálculos: 1% (100 plazas x 72 euros/plaza/día x 365 días)

En dicha comunicación se concede a la entidad 10 días para efectuar las alegaciones que tenga por convenientes.

CUARTO.- Con fecha 29 de mayo de 2025, el contratista presenta escrito de alegaciones solicitando el archivo de la propuesta de imposición de penalidad

QUINTO.- La Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia, con fecha 2 de junio de 2025, ha elevado propuesta de imposición de penalidades al órgano de contratación, por importe de 26.280,00 euros derivada del incumplimiento citado, ya que las alegaciones efectuadas por la entidad no han desvirtuado los hechos objeto de imposición de penalidad, ni su cuantía.

En cuanto a la alegación primera, la entidad basa sus alegaciones, "Sobre los criterios aplicados por la Dirección General del Mayor para el cálculo de la ratio del personal.", en la puesta en cuestión del periodo de cómputo de la ratio, que a su entender debiera ser únicamente en periodo anual, basándose para esta consideración en el hecho de que el convenio colectivo vigente para el personal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal, establece la jornada de trabajo en cómputo anual.

A este respecto, debe señalarse en primer lugar que la ratio se ha calculado sobre el número de profesionales que han prestado servicios con **presencia física**, según la documentación de fichajes aportada por el centro y la media de usuarios atendidos durante el periodo del 10 al 16 de marzo de 2025, que, en ningún momento ha sido cuestionado por la entidad, independientemente del personal contratado por la entidad durante el año.

No se trata, como alega la entidad, de un mero análisis superfluo del personal del centro en una semana concreta. El adjudicatario debe conocer las condiciones a las que viene obligado para el correcto cumplimiento de las prestaciones del contrato suscrito, que se concretan en el citado Pliego de Prescripciones Técnicas y que deben ser previstas y cumplidas de forma continuada. En este sentido, como la propia entidad señala en su escrito la cláusula VIII del Pliego de Prescripciones Técnicas, señala textualmente: ***“En el cálculo de la ratio se incluirá el personal citado que se encuentre prestando sus servicios, de manera efectiva en el centro durante el periodo de cómputo.”***

Con su interpretación la entidad confunde la elección del periodo para el cálculo de la ratio, con el cálculo de la equivalencia entre la jornada de trabajo efectivo del personal durante este periodo y el 100% de jornada anual, calculo éste que resulta necesario únicamente con el fin de establecer la plantilla equivalente del centro de acuerdo con los cálculos establecidos en la tabla que figura en el antecedente de hecho segundo.

No puede tener amparo en los pliegos, como pretende la entidad con su interpretación, que el único periodo posible para calcular la ratio sea anualmente para entender cumplida la ratio exigida y garantizar la correcta prestación de los servicios a los que viene obligada, sino que, como resulta obvio, es necesario su cumplimiento **de forma continua desde el inicio y durante todo el tiempo de vigencia del contrato, cualquiera que sea el periodo de cómputo**. Llevada al límite esta pretensión, podría darse el absurdo de que, aun cumpliendo la ratio en cómputo anual, en una fecha o periodo determinado no acudiera ningún trabajador al centro, sin que ello supusiera, de acuerdo con esta teoría, incumplimiento de la ratio exigida en los pliegos.

Respecto a la alegación segunda *“Sobre las incidencias en la semana del 10 al 16 de marzo de 2025 en el Centro Bouco Pinto 1”*, la propia entidad reconoce implícitamente en su escrito de alegaciones el incumplimiento de las obligaciones contractuales, a la vez que pone de manifiesto problemas organizativos, así como dificultades existentes en el mercado laboral para contratación del personal cuya deficiencia es objeto del presente expediente de penalidad. En este punto, es necesario señalar que la entidad adjudicataria debe conocer las condiciones a las que viene obligada para el correcto cumplimiento de las prestaciones del contrato suscrito que se concretan en el Pliego de Prescripciones Técnicas y que deben ser previstas y cumplidas por el adjudicatario de forma **continuada desde el inicio y durante todo el tiempo de vigencia del contrato**, por lo que no cabría alegar dificultades en la contratación u otras circunstancias organizativas para su cumplimiento.

SEXTO.- Una vez desestimadas las alegaciones formuladas por la empresa contratista y constatados los incumplimientos contractuales producidos, cabe señalar que El Pliego de Prescripciones Técnicas del Acuerdo Marco señala en el apartado VIII. *Medios que debe aportar el adjudicatario para la prestación del servicio*, que:

4. *El personal para atender a los usuarios debe ser tal que asegure las siguientes ratios:*

- 0,47, sumando a todos los profesionales de atención directa: director, médicos, enfermeros, gerocultores, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, trabajador social, psicólogo y animador sociocultural, éstos dos últimos cuando los haya.
- 0,33, de gerocultores.
- 0,15, sumando a todos los profesionales encargados de la limpieza, cocina y mantenimiento.

En el cálculo de la ratio se incluirá el personal citado en cada caso, que se encuentre prestando

sus servicios, de manera efectiva en el centro durante el periodo de cómputo.

El cálculo se realizará computando cada efectivo en la equivalencia que corresponda según la proporción entre su jornada de trabajo y el 100% de la jornada anual según el convenio colectivo aplicable en cada centro.

En el denominador para el cálculo de la ratio se computarán todos los usuarios de la residencia. A tal efecto se tendrán en cuenta todas las plazas realmente ocupadas independientemente de que en el momento del cómputo los usuarios se encuentren temporalmente ausentes por ingreso hospitalario, permiso de ausencia reglamentario o cualquier otra causa.”

SÉPTIMO.- El hecho descrito en el apartado SEGUNDO de esta Orden se tipifica como una de las infracciones descritas en el punto 2.1, del apartado 21.B de la cláusula 1ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el Acuerdo Marco, a cuyo tenor:

“2. Graves: Se podrá imponer una penalidad del 1 % de la BP en los siguientes casos:

2.1. Por la utilización de medios personales inferiores a los establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, salvo lo recogido en el anterior apartado punto 1.5.

El párrafo segundo del citado apartado 21.B, establece que la base económica de penalización (en adelante, BP) se calculará sobre el total de las plazas contratadas al adjudicatario en el centro en el que se haya producido el incumplimiento o cumplimiento defectuoso y en el momento en que se haya producido el hecho que dé lugar a las mismas, valoradas al presupuesto de licitación (72,00 € plaza/día) por los días del año, es decir se aplicará la siguiente fórmula: BP= Plazas contratadas x 72,00 € plaza/día x 365 días.

En cuanto a su cuantía y forma de cálculo de la penalidad se mantiene lo establecido en la Comunicación del Director General de Atención al Mayor y a la Dependencia de 6 de mayo de 2025 y que se reproduce en el punto tercero de esta Orden.

De acuerdo con lo expuesto, y de conformidad con la propuesta de la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia, en aplicación del art. 192 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y del apartado 21 de la cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por el que se rige el citado Acuerdo Marco.

DISPONGO

Imponer a SENIOR 2000 S.L.U. una penalidad por importe de VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS (26.280,00 euros) por incumplimiento del Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen el Acuerdo Marco.

De acuerdo con el artículo 194.2 de la mencionada Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la penalidad se hará efectiva mediante la deducción de las cantidades que en concepto de certificaciones mensuales deban abonarse al contratista, o sobre la garantía que se haya constituido cuando no pueda deducirse de las mencionadas certificaciones.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo un mes, ante el mismo órgano que lo ha dictado, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia o los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, ambos plazos contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer. Todo ello

conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículos 8 a 12 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, a la fecha de la firma.

LA CONSEJERA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES
(P.D. Orden 3147/2023, de 5 de diciembre, BOCM nº 304, de 22/12/2023)
EL DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Firmado digitalmente por: ALVAREZ LÓPEZ OSCAR
Fecha: 2025.08.22 17:59